

PERU 1992: LA SORPRESA DE ABRIL DE FUJIMORI*

David Scott Palmer

El artículo analiza el Golpe de Estado en Perú y se pregunta acerca de las razones del Presidente Fujimori para tomar esta iniciativa, teniendo en cuenta la reacción internacional y las consecuencias políticas internas. En este sentido plantea que el pronunciamiento fue cuidadosamente planificado y que se habían evaluado sus costos. Por un lado, Perú había logrado insertarse económicamente en el sistema internacional revirtiendo la crisis económica y, por otro, contaba con el apoyo del pueblo. Según el autor, la principal duda sobre la efectividad del autogolpe está en el efecto que tendrá en la lucha contra Sendero Luminoso.

Alberto Fujimori sorprendió tanto a sus compatriotas peruanos como al mundo la tarde del domingo 5 de abril, al anunciar en la televisión nacional la suspensión "temporal" de la Constitución y el Congreso de su país, como también el establecimiento de un "gobierno de emergencia de reconstrucción nacional" bajo su dirección. Anunció, además, la reorganización del poder judicial y del equivalente peruano de la oficina de la Contraloría General y habló de futuros plebiscitos para ratificar los cambios electorales y administrativos.

En un solo discurso, el Presidente electo del Perú dismanteló el procedimiento constitucional de doce años —el segundo más largo período de gobierno civil en la historia del país— que lo había elevado al cargo en julio de 1990. Con esta acción, Fujimori desechó el proceso democrático, si bien imperfecto, sobre el cual había descansado la legitimidad de un gobierno acosado por la peor combinación de problemas en el hemisferio. Las Fuerzas Armadas y la policía inmediatamente apoyaron al Presidente y se movilizaron para cercar o para poner en arresto domiciliario —temporalmente, se vio des-

*Trabajo presentado para el Council on Foreign Relations, "The Peruvian Crisis: The Institutional Coup and its Consequences", Perú Workshop, New York, lunes 11 de mayo de 1992.

pués— a numerosos políticos y periodistas importantes. También pusieron guardias alrededor de los edificios de los principales medios de comunicación. Pronto surgió una gran cantidad de decretos presidenciales, incluyendo los que destituían a la mitad de los jueces de la Corte Suprema y los que entregaban a la Fuerza Aérea el control sobre la coca y la pasta de coca producidas en el valle superior de Huallaga.

¿Que podría haber inducido a este flemático Presidente peruano —visto como un tecnócrata pragmático— a tomar una iniciativa virtualmente garantizada de ser vista con enojo por los Estados Unidos y la comunidad internacional, a alinear a la mayoría de los políticos, a revitalizar la suerte política del ex Presidente Alan García (1985-1990) y a jugar en las manos de los insurgentes de Sendero Luminoso? ¿Calculó terriblemente mal? ¿O este paso significó un atrevido golpe para expulsar de una vez todo el hervidero de inmovilismo pestilente atribuido a los procesos democráticos peruanos?

El Presidente Fujimori tenía que saber que su pronunciamiento del 5 de abril comprometería sus relaciones con los Estados Unidos, especialmente cuando el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, se encontraba en el Perú y tenía una cita con él al día siguiente. También podría haber anticipado que los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales reaccionarían con enojo frente a este paso atrás en el camino democrático, que virtualmente dominaba en todos los países latinoamericanos a partir de los años cincuenta.

Sin embargo, cuando hizo su anuncio el 5 de abril, Fujimori y su gobierno ya habían conseguido reinsertar al Perú dentro del sistema económico internacional y detener la hemorragia económica interna que había tenido al país al borde del colapso en 1990. ¿Cuánto tiempo podría haber subsistido una nación sin acceso alguno al crédito y con una inflación acumulada del 2 millones por ciento en un período de cinco años, que fue la situación que Fujimori heredó del gobierno del APRA, de Alan García?

Elegido en gran medida porque no era un político de carrera, este japonés-peruano de segunda generación confundió a sus críticos implementando un programa económico de *shock* que, entre otras cosas, redujo la inflación de 7.650% en 1990 a una menor de 140% en 1991, e indujo a un modesto crecimiento económico (alrededor del 2%) por primera vez en cuatro años. Además, e inicialmente con

gran sacrificio, a fines de 1990 el gobierno peruano reasumió sus pagos mensuales a las instituciones financieras internacionales por primera vez desde que García los había suspendido casi tres años antes. Las cuentas en dólares y otros incentivos hicieron retomar al país cerca de mil millones de dólares, ayudando a reponer las reservas en divisas, que llegaron a los más altos niveles en seis años.

En septiembre de 1991, las instituciones financieras internacionales, los bancos privados y los gobiernos del Club de París recompensaron a Fujimori y a su gobierno por sus esfuerzos con un paquete de dos mil millones de dólares como parte de la reinserción del Perú en la comunidad financiera internacional. Las encuestas de opinión pública del Perú también recompensaron a Fujimori con un apoyo de entre el 60% y 70% a fines de 1991, después de haber alcanzado a principios de ese año sólo la mitad de ese nivel.

A cambio de ese significativo programa de estabilización económica, Fujimori había esperado un apoyo mucho más sustancial de parte del gobierno de los Estados Unidos que los 84 millones de dólares aprobados por el Congreso, a regañadientes, para la "guerra contra las drogas", el último día del año fiscal. El Presidente Fujimori hizo notar repetidamente y en público su amargo desencanto frente a ese bajo nivel de apoyo norteamericano y en especial a la guerra a las drogas del Presidente Bush en febrero de 1992, a continuación de la conferencia de San Antonio de Jefes de Estado de los países andinos y de México. Además, la semana antes del autogolpe, el Presidente del Perú había estado en su Japón nativo buscando también ayuda adicional. Allí había expresado su desaliento a las autoridades japonesas frente a los modestos 127 millones en nuevos recursos que se le habían ofrecido.

Estos hechos sugieren claramente que el Presidente Fujimori estaba bien al tanto, previamente, de las posibles repercusiones internacionales del autogolpe y que había llegado a la conclusión de que los costos para el Perú no serían tan grandes.

Ni los Estados Unidos ni el Japón proporcionarían más ayuda económica y si se suspendieran esos programas bilaterales las consecuencias no serían tan serias. Más aún, los Estados Unidos habían gastado ya casi toda la cantidad que se habían comprometido a dar al Perú en el año fiscal de 1992. Las reservas en divisas eran altas. El nuevo tipo de cambio sol/dólar necesitaba ajustes en favor del dólar para estimular las exportaciones legales. El proceso de reinserción se

había terminado y las instituciones financieras internacionales difícilmente echarían pie atrás. Fujimori concluyó, pues, que no se interponía en su camino ningún obstáculo insalvable.

El Presidente Fujimori tenía varios problemas propios que limitaban su capacidad para presidir en forma efectiva el proceso democrático del Perú. Fue el primero de los tres Presidentes civiles elegidos que tenía minoría en las dos cámaras. Su "partido", Cambio 90, fue formado sólo meses antes de la elección y se parece mucho más a una débil y cambiante coalición que a una genuina organización política. El mismo Fujimori había ganado la presidencia sin haber tenido jamás un cargo político. En 1990, el electorado vió esto como una ventaja después de cinco años de García y del APRA.

Sin embargo, esto significa también que Fujimori no tenía ni la habilidad ni la experiencia política para la marcha del proceso democrático. Si bien tuvo bastante éxito en el cumplimiento de su plan político durante los primeros dieciséis meses en el cargo, comenzó a sentirse cada vez más frustrado a medida que el Congreso comenzó a jugar un papel más importante.

La dramática iniciativa del 5 de abril del Presidente peruano era un plan cuidadosamente calculado, dirigido en primer lugar en contra del APRA y del ex Presidente García. Estaba diseñada para bloquear la posición política del Congreso, en la cual el APRA tenía el bloque más numeroso y la de un poder judicial lleno de cargos de gente del APRA. Como lo veía Fujimori, la politiquería y la corrupción amenazaban la batalla de su gobierno contra Sendero Luminoso y podría también afectar al éxito de su programa de recuperación económica. La inflación estaba elevándose nuevamente, del 3% en enero al 7% en marzo. Las encuestas de opinión poco después del autogolpe mostraron que disminuía el apoyo a Fujimori, si bien permanecía todavía por sobre el 50%. El ex Presidente García había sido absuelto de los cargos de corrupción por una Corte Suprema nombrada predominantemente por él. Había sido recién elegido Secretario General del APRA y estaba empezando a montar una campaña contra Fujimori. La meta obvia era colocarse favorablemente, él y el APRA, para las elecciones de 1995.

El poder judicial tenía serios problemas estructurales y políticos. El Presidente Fujimori había expresado su ira en contra del poder judicial, llamando en su discurso inaugural "Ministro de Injusticia", al Ministro de Justicia. A fines de la década del ochenta dos tercios de

los prisioneros estaban esperando juicio y sólo el 5% de los arrestados por actos terroristas habían sido procesados. La liberación, entre enero y marzo de 1992, de más de doscientos guerrilleros convictos que no habían cumplido su sentencia, añadieron el insulto a la injuria. Las razones judiciales eran que ya habían sido suficientemente rehabilitados, pero de hecho la mayoría se volvió a reunir con los insurgentes.

Otro tema que puede haber contribuido al autogolpe, aunque no fue mencionado por Fujimori, fue la acusación hecha por su esposa, y ampliamente difundida pocos días antes del 5 de abril, de que miembros de la propia familia del Presidente estaban involucrados en un escándalo de corrupción concerniente al mal uso y venta de ropa donada por Japón al Perú. Si hubiera habido alguna base para esta acusación, al declarar a la Contraloría General del país en reorganización, evitó cualquier investigación inmediata de los cargos. Pero aunque hubiera sido cierta, esta preocupación era poco importante.

Mucho más serio era el tema subyacente del propio Sendero Luminoso. Fujimori declaró repetidamente que el "problema del terrorismo" era la primera prioridad de su gobierno y afirmó abiertamente en las semanas anteriores al autogolpe que Sendero sería totalmente eliminado al final de su mandato a mediados de 1995. La suspensión del Congreso y la reorganización del poder judicial liberarían a las Fuerzas Armadas y al ejecutivo a tomar una línea de acción más dura en contra de la guerrilla sin estar sujetos a las limitaciones o críticas de esos cuerpos gubernamentales.

Fujimori contaba con el poder popular para sus drásticos pasos del 5 de abril, que surgía de una frustración generalizada con las continuas ineficiencias del proceso democrático del Perú en manejar la economía y la insurgencia, y específicamente dirigida en contra del Congreso y el poder judicial antes que del ejecutivo o los militares. Las encuestas durante las tres primeras semanas demostraron que el Presidente tenía razón: generó entre el 70% y el 83% de apoyo. Otra materia diferente era el tiempo que se podía sostener ese apoyo popular.

Aunque la justificación de Fujimori para suspender "temporalmente" la democracia para salvar a Perú estuviera bien fundada, mientras más largo sea más opuesto será el resultado. Sendero Luminoso gana demostrando que ya no existe ni siquiera la fachada

democrática burguesa. Las Fuerzas Armadas y la policía perdieron acceso al equipamiento y al entrenamiento en contrainsurgencia debido a los cortes de ayuda por la oposición internacional. Los abusos del gobierno frente a los derechos humanos se pueden intensificar, deslegitimando todavía más a la autoridad central en precisamente aquellos sectores de la población más susceptibles a los esfuerzos de reclutamiento de Sendero Luminoso. Y, así como Fujimori subestimó el papel de los Estados Unidos tras el escenario para ayudar a reinsertar al Perú a la comunidad financiera internacional, puede ser que no le tome el peso suficiente a la capacidad del gobierno de Bush para deshacer ese esfuerzo.

Fujimori cuenta con la preocupación de los Estados Unidos por la grave situación del Perú, especialmente en lo que respecta a la insurgencia, para dominar el enfoque de la administración de Bush. Cree que el gobierno de los Estados Unidos, forzado a elegir, decidirá mantener a su gobierno en el poder antes que arriesgarse al peligro de un mayor debilitamiento del gobierno peruano, con una línea dura para forzar la restauración del *status quo* anterior. Para estimular ese resultado, Fujimori casi inmediatamente presentó un detallado programa para restaurar la democracia. Esto ocurriría a través de cambios institucionales, un plebiscito para ratificarlos y nuevas elecciones del Congreso, todo terminado dentro de un año. El Jefe de gobierno peruano había apostado a que los Estados Unidos tragarían duro pero continuarían con su apoyo. De hecho, parece que eso está ocurriendo, como lo simboliza la vuelta al Perú a fines de abril del Subsecretario Aronson, para la reunión con el Presidente Fujimori que fue cancelada por el autogolpe.

Al principio, los Estados Unidos presentaron una línea dura, suspendiendo toda nueva ayuda económica y militar y proponiendo una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para considerar sanciones. Pero la resolución de la OEA se enfocó en el diálogo para restaurar la democracia antes que en las sanciones. La política de los Estados Unidos ha seguido desde entonces un curso similar. La apuesta de Fujimori sobre los Estados Unidos parece haber rendido frutos.

El problema básico con el autogolpe para Perú es el efecto que tendrá sobre la capacidad de Sendero Luminoso para continuar y expandir su "guerra a la gente". El abandono de los procedimientos democráticos, incluso si son temporales, elimina la base de la legiti-

midad central del gobierno en su lucha por el control del pueblo y del territorio. Tal acto quita a las organizaciones locales en las villas miseria urbanas y las comunidades rurales campesinas su acceso al sistema político nacional —especialmente al Congreso— a través del partido y de los intermediarios de los sindicatos.

Los senadores y congresistas electos, a su vez, perdieron su foro para exponer temas a favor de sus clientelas, para hacer responsable a Fujimori, al menos en parte, de sus acciones y, particularmente, para detectar las violaciones a los derechos humanos. El Congreso perdió su legitimidad como institución de gobierno al ser suspendido: al operar como una "organización de sombra", en la semiclandestinidad, no se le devuelve su *status*.

El abuso de los militares y de la policía en el nombre de la lucha contra la insurgencia ha sido seguramente el factor más significativo que contribuyó a la capacidad de Sendero Luminoso para ganar nuevos adeptos en los márgenes de la sociedad. Con la suspensión del Congreso, el único contrapeso importante en el país contra esos excesos, tales abusos aumentarán seguramente. Además, para reforzar el autogolpe, las Fuerzas Armadas tendrían que conceder más atención a aquellos que han sido los más activos soportes de la democracia peruana. Esto significa que tendrán incluso nuevos recursos para contrarrestar a aquellos empeñados en destruir la democracia.

Estos hechos sólo pueden ayudar a Sendero Luminoso. Si la insurgencia es en realidad la primera prioridad del gobierno, como lo ha repetido tanto Fujimori, la suspensión de la democracia para solucionarlo puede tener exactamente el resultado contrario. El autogolpe político, como el autogol en el fútbol, revierte el momento del equipo, desmoraliza a sus jugadores y bien puede lograr que el equipo pierda.